

Carlos Anaya solicitó amparo ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, contra el Presidente municipal de Omitlán que pretende mandar abrir una zanja en terrenos de la propiedad del quejoso, con lo cual cree éste violados en su persona los arts. 14, 17 y 27 de la Constitución jeneral.

El Juez de Distrito concedió el amparo y la Suprema Corte revocó ese fallo.

-
- I. Tratándose de asuntos que afecten la salubridad pública, ¿tienen facultad los Ayuntamientos de dar disposiciones como la que motivó al presente recurso?
- II. ¿Puede la Suprema Corte resolver los puntos que se refieren á la propiedad alegada para sostener la procedencia del amparo?

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal alegando de bien probado en el juicio de amparo promovido por el C. Carlos Anaya, contra el Presidente Municipal de Omitlán, por violación de los arts. 14, 17 y 27 del Código fundamental, dice: que á su entender, ese Juzgado debe declarar en definitiva, y así se ha de servir hacerlo, que la Justicia de la Unión ampara y protege al promovente, en virtud de prestar méritos para ello las constancias de los autos y las breves consideraciones que pasa á exponer.

Pedimento
fiscal.

Asegura aquel en su escrito de queja, que estando en posesion y teniendo la propiedad de un terreno llamado "Campo mortuorio," comprendido dentro de los límites del rancho de Celis, de que también se juzga propietario, el Presidente municipal de que se hizo mencion ántes, despues de haberle librado una órden para que evitara introducirse con sus labores en dicho terreno, mandó abrir en él una zanja y comenzó á ejecutarse esta disposicion, con mengua de los derechos que le garantizan los artículos constitucionales que quedan enumerados.

A su vez la autoridad responsable sin negar estos hechos, afirma haber procedido de ese modo, en atencion á que el campo de que se trata fué cedido á la Iglesia, por uno de los antecesores del quejoso, para la inhumacion de cadáveres, lo que estuvo verificándose hasta mil ochocientos cincuenta y nueve, en que se clausuró por falta de espacio para más inhumaciones; quedando luego bajo el cuidado del Municipio, en observancia de la ley de 31 de Julio del propio año; de suerte que niega terminantemente al C. Anaya el carácter de poseedor y propietario con que se ha presentado en este juicio.

Abierta la dilacion probatoria que en el caso correspondia, el recurrente presentó tres testigos para justificar, como lo verificó, varios hechos, de los que los principales son.

Primero: que Don Cruz y Don Encarnacion Anaya, abuelo el uno y padre el otro de aquel, prestaron sucesivamente á la Iglesia, desde el año de mil ochocientos treinta y tres, pero nunca le cedieron en propiedad, el lugar conocido con el nombre de Camposanto Viejo; y

Segundo: que éste fué comprado por el quejoso á Donaciano Mangüía, hará como catorce años, desde cuya época ha estado en posesion de él, sembrándolo y aprovechándose de sus frutos.

Presentó tambien, testimoniada una informacion rendida por Don José Cruz Anaya para acreditar los límites de los terrenos que poseía en Omitlan, entre las cuales se halla comprendido el "Campo mortuorio;" además, el discernimiento del cargo de albacea de la testamentaria de su padre Don Encarnacion Anaya, de quien fué declarado único y universal heredero; y por último unas órdenes expedidas en Mayo de mil ochocientos setenta y nueve, por la Presidencia municipal, á cargo entónces del mismo que hoy la desempeña, previniendo á Anaya la comparescencia ante ella y la suspension de todo trabajo en el terreno relacionado.

El que suscribe, atendiendo á que la autoridad ejecutora asienta en uno de sus informes tratando de convencer á ese Juzgado de que aquel no ha tenido la propiedad ni la posesion del "Campo mortuorio," que cuando el Juez de primera instancia de Atotonilco, quiso posesionarlo, segun fallo pronunciado en mil ochocientos setenta y ocho, de varios solares y luecas rústicas, entre las que estaban comprendidas las propiedades del Municipio, éste y los vecinos perjudicados interpusieron el recurso de amparo que les fué concedido; pidió la compulsa de las constancias que estimó conducentes, apareciendo de los autos originales que se mandaron agregar, que en efecto el amparo se concedió á los individuos que lo pretendieron, pero no al Municipio, que ni lo intentó, ni podia intentarlo.

Por una razon análoga, solicitó tambien este Ministerio testimonio de ciertas piezas que deben obrar en un juicio seguido por la Señora Joaquina Olguin de Calderon, contra el C. Anaya, sobre pesos; mas el Juzgado de primera instancia de este Distrito, á quien se le pidió olvidando hasta las reglas de cortesía, no se dignó contestar siquiera ninguno de los oficios relativos.

Fuera de los datos que quedan mencionados, obran los justificantes remitidos por la autoridad responsable, entre los que llama la

atencion el ocursó que le elevaron algunos vecinos de Omitlan, solicitando la suspension de los barbechos emprendidos por el quejoso en el "Campo mortuorio" y la demarcacion de los linderos; de cuyo ocursó habiéndose mandado dar conocimiento á aquel, contestó: que no le era posible suspender los trabajos; motivo por el cual el Presidente decretó de plano que los suspendiera y que se procediese á señalar los límites, diligencia que se llevó á cabo el día trece del anterior Abril.

De todos estos precedentes se deduce: primero, que si no está comprobada, por parte de Anaya, la propiedad del terreno en cuestion, consta por lo ménos que lo ha estado poseyendo, y tiene en consecuencia, á su favor la presuncion de propietario, mientras otra cosa no se pruebe; segundo, que con la demarcacion de límites decretada y ejecutada por el Presidente municipal, suponiendo cierto que el "Campo mortuorio" estuviera bajo la vijilancia del Municipio, se ha invadido la esfera de la autoridad judicial, única competente para practicar esa clase de diligencias, previas las formalidades legales; y tercero, que los procedimientos de la autoridad ejecutora han conculcado evidentemente las garantías que protejen los arts. 16 y 27 de la Carta Federal, no sólo por falta de competencia para ordenar y ejecutar un apeo y deslinde, sino por haber molestado á Anaya en sus posesiones y ocupado su propiedad con la apertura de una zanja, sin causa legal ni motivo de pública utilidad.

Por tanto, siendo procedente el recurso intentado, la Promotoria con fundamento de los arts. 101 y 102 de la citada carta, concluye suplicando á vd. se sirva fallar en el sentido que indicó yá, en el primer párrafo de este alegato.

Pachuca, Mayo 29 de 1883. — *Miguel Lora.*

Pachuca, Junio 4 de 1883.

Visto este juicio promovido por el C. Carlos Anaya, contra los actos del Presidente municipal de Omitlan que pretendió abrir una zanja en un terreno de su propiedad para acotarlo, impidiéndolo hacer en él sus labores, por reputarlo un antiguo campo mortuorio, con cuyos hechos estima el quejoso que se han infringido los arts. 14, 17 y 27 de la Constitucion federal. Vistos, el informe de la autoridad responsable, las pruebas rendidas, los pedimentos fiscales y demas constancias de este expediente; y

Resultando: que el quejoso está por lo menos en posesion de un terreno que hace algunos años se destinó para campo mortuorio; que por esta última circunstancia el Presidente municipal de que se tra-

Sentencia del
Juez
de Distrito.

ta, fundado en diversos antecedentes que justifican efectivamente que en el citado terreno se sepultaron algunos cadáveres con consentimiento del propietario de ese mismo terreno, creo que es de su deber acotarlo para que se guarde el respeto debido á ese lugar por los restos humanos que en él existen; que á ese acotamiento se ha resistido el peticionario, y que su resistencia motivó las órdenes que acompaña á su demanda de amparo, y el que el Presidente municipal de Omítilan hubiera comenzado á hacer dicho acotamiento.

Considerando: que esos antecedentes demuestran que la controversia suscitada entre el Presidente municipal de Omítilan y el peticionario no puede decidirse gubernativamente por aquel, sino que corresponde conocer de ella y fallarla á la autoridad judicial, única competente para decidirla, y por lo mismo que el Presidente municipal de Omítilan, ha infringido con sus actos los arts. 14 y 16 de la Constitución Federal.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo pedido por el U. Promotor fiscal y con fundamento de los citados artículos constitucionales, y 101 102 de la misma Constitución se resuelve:

Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Carlos Anaya contra los actos de que se queja.

Segundo: Hágase saber, publíquese y remítase este expediente á la Corte Suprema de Justicia para los efectos legales.

Así definitivamente juzgando lo sentenció y firmó el C. Lic. José Hernandez Carrasco, Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo. Doy fé. — *José Hernandez Carrasco.* — *Vicente Landa*, secretario.

México, Marzo 3 de 1884.

Ejecutoria

Visto el juicio de amparo interpuesto ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo por Carlos Anaya, contra actos del Presidente municipal de Omítilan que pretende mandar abrir una zanja en un terreno de su propiedad para acotarlo con el objeto de que se guarde el debido respeto á los restos humanos en él depositados como antiguo campo mortuario, con lo que cree el promovente violados los arts. 14, 17 y 27 de la Constitución.

Visto el fallo del Juez de Distrito que concedió el amparo; y

Considerando: que el acto reclamado fué ordenado en una cuestión relativa á salubridad pública lo que es de la competencia de la autoridad Municipal á cuyo orden pertenece la autoridad responsable:

Que si el quejoso es ó nó propietario del terreno en cuestión, tesis sostenida contradictoriamente por el Presidente municipal y por Ana-

ya, no toca resolverla á esta Corte Suprema, sino á la autoridad común en el juicio correspondiente.

Por estas consideraciones y con arreglo á los arts. 101 y 102 de la Constitucion se revoca la sentencia del Juez de Distrito y se declara:

Que la justicia de la Union no ampara á Carlos Anaya contra los actos de que se queja.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con testimonio de esta sentencia para los efectos legales, archivándose el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—Presidente:—*Guillermo Valle.*—Ministros:—*M. Auza.*—*Eleuterio Avila.*—*Jesus Maria Vazquez Palacios.*—*Manuel Contreras.*—*Manuel Saavedra.*—*Francisco Vaca.*—*T. Melesio Alcántara.*—*F. J. Corona.*—*M. Rojas.*—*Eduardo Ruiz.*—*Enrique Landa*, secretario.

JOAQUIN PRIMO DE RIVERA.

El Lic. Joaquin Primo de Rivera, Dean de la Catedral de México, ocurrió al Juzgado 2º de Distrito del Distrito Federal, en solicitud de amparo, contra una orden del Ejecutivo de la Union, relativa á que el Lic. Juan A. Mateos, redima el precio de un local contiguo á la expresada Catedral, y contra el acto por el cual se mandó otorgar la escritura de subrogacion en favor del mismo Mateos; actos que en concepto del promovente, violan los artículos 16 y 27 de la Constitucion.

El Juez de Distrito negó el amparo y la Suprema Corte confirmó ese fallo.

-
- I. El precio del local denunciado y de cuya adjudicacion se trata, ¿es redimible, conforme á las leyes de la materia?
 II. ¿Tuvo facultades el Ejecutivo de la Union, para hacer esa adjudicacion?
 III. La controversia en que se aleguen los derechos del poseedor y los del denunciante, ¿puede resolverse en juicio de amparo?

C. Juez 2º de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el Lic. D. Juan de D. Villarello ha ocurrido á este Juzgado en representacion del Dean de la Catedral de México Lic. D. Joaquin Primo de Rivera, en solicitud del amparo de la Justicia federal, contra la resolucion administrativa del C. Presidente de la República, dictada en 19 de Junio del presente año, en la que se sirvió acordar que el C. Juan Mateos redima conforme á la ley de 10 de Diciembre de 1869, el justiprecio del local contiguo por

Pedimento
fiscal.